

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinte (20) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE : JUAN DE LA CRUZ GARCÍA RIVERA
DEMANDADO : PORVENIR S.A, COLPENSIONES Y EL MINISTERIO
DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
TIPO DE PROCESO : EJECUTIVO
RADICADO NACIONAL : 05-001-31-05-017-2022-0363-01
RADICADO INTERNO : 358-22
DECISIÓN : CONFIRMA
ACTA NÚMERO : 016

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a resolver el recurso de apelación dentro del proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte ejecutante solicitó se librara mandamiento de pago en su favor y en contra de Porvenir S.A por el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, del artículo 65 de ley 100 de 1993, bajo la modalidad de garantía de pensión mínima, a partir del 1 de febrero de 2019, por la suma de \$1.908.526 por concepto de del proceso ordinario y por las costas del proceso ejecutivo.

En virtud de lo anterior el Juzgado mediante auto del 23 de agosto de 2022, (FDF 02 del expediente digital), dispuso lo siguiente:

“PRIMERO. LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por la vía ejecutiva laboral, a favor del señor JUAN DE LA CRUZ GARCÍA RIVERA identificado con cédula de ciudadanía N° 2.776.141, y en contra de PORVENIR S.A. y COLPENSIONES, por los siguientes conceptos:

A CARGO DE COLPENSIONES:

*Trasladar a la AFP PORVENIR S.A. la totalidad de las cotizaciones realizadas por el actor en toda su vida laboral y que tiene en su poder, con la rentabilidad acumulada durante el respectivo período de las reservas para pensión de vejez del ISS, o en su defecto la informada por la Superintendencia Financiera para los períodos respectivos, en los términos de los arts. 6 y 7 del Decreto 3595 DE 2008.

Al momento de la contestación o de proponer excepciones, deberá armar toda la documentación, correos electrónicos y demás pruebas con las que demuestre que ha realizado el trámite administrativo para el cumplimiento de la sentencia, motivo por el cual se le ejecuta.

A CARGO DE PORVENIR S.A.:

1) Una vez que COLPENSIONES ponga a disposición los dineros correspondientes a las cotizaciones y en la forma como se indicó en la sentencia, el fondo de pensiones tendrá el término de 10 DÍAS, para que realice el estudio de reconocimiento de la prestación económica de vejez o de garantía de la pensión mínima del Sr. JUAN DE LA CRUZ GARCÍA RIVERA bajo los postulados de los artículos 64 o 65 de la Ley 100/1993.

En caso de que cumpla con los requisitos para el reconocimiento de la garantía de la pensión mínima, el reconocimiento pensional será desde el 01 de febrero de 2019 y por el contrario, en caso de que se cumpla con las condiciones del Art. 64 de la Ley 100/1993, el disfrute del derecho pensional será a partir de la fecha en que se reúna el capital-situación que deberá ser informada por la AFP.

2) Por valor de \$1.908.526, por concepto de agencias en derecho impuestas dentro del trámite del proceso ordinario.

Ambas entidades ejecutadas, deberán aportar dentro del término de traslado, la documentación necesaria y administrativa para demostrar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en sentencia”.

Posteriormente una vez fueron notificadas las ejecutadas dieron respuesta a la demanda ejecutiva proponiendo las siguientes excepciones: **Colpensiones** las de prescripción, pago-cumplimiento de obligación de hacer, compensación, imposibilidad de embargo de los bienes administrados por Colpensiones respecto de conceptos diferentes a prestaciones económicas del sistema pensional, imposibilidad de condena en costas y la innominada, y **Porvenir S.A** las excepciones de exigibilidad condicionada, imposibilidad jurídica de solución o pago.

Las anteriores excepciones fueron resueltas en diligencia del 05 de diciembre de 2022 donde se dispuso lo siguiente:

“**PRIMERO:** DECLARAR probada la excepción de PAGO propuesta por la abogada de Colpensiones, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva. Terminar el proceso de ejecución en relación con COLPENSIONES.

SEGUNDO. DECLARAR NO probadas las excepciones propuestas por la apoderada de la parte ejecutada PORVENIR S.A.

TERCERO. CONTINUAR con la ejecución por los conceptos por los cuales se libró mandamiento de pago y que guardan relación a PORVENIR S.A., según lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO. CONCEDER 10 días a PORVENIR S.A. para que realice el estudio de reconocimiento de la prestación económica de vejez o de garantía de la pensión mínima del Sr. JUAN DE LA CRUZ GARCÍA RIVERA. Recordar que en caso de que cumpla con los requisitos para el reconocimiento de la garantía de la pensión mínima, el reconocimiento pensional será desde el 01 de febrero de 2019 y por el contrario, en caso de que se cumpla con las condiciones del Art. 64 de la Ley 100/1993, el disfrute del derecho pensional será a partir de la fecha en que se reúna el capital-situación que deberá ser informada por la AFP.

QUINTO. COSTAS a cargo de Porvenir S.A. y a favor de la parte ejecutante. Se fijan las agencias en derecho en la suma equivalente a \$1'000.000”

RECURSO DE APELACION

Inconforme con lo anterior el apoderado de Porvenir S.A interpuso recurso de apelación manifestando que se debe revocar la providencia de primera instancia en cuanto a qué se dio por probada la excepción de pago por Colpensiones y continuar con la ejecución respecto de Porvenir teniendo en cuenta qué cómo quedó claramente en la sentencia, de conformidad con la historia laboral que se aporta se puede observar que 19.5 semanas en la historia laboral que no se han podido resolver de manera adecuada en favor del demandante y que por lo tanto no se ha dado el cumplimiento por parte de Colpensiones referente a estas semanas que están entorpeciendo el proceso para iniciar la conformación de la historia laboral del demandante atendiendo a qué es una obligación que quedó condicionada, y que si bien es cierto qué Colpensiones trasladó determinado número de semanas, las mismas no satisfacen la totalidad necesaria de conformidad con lo ordenado por el tribunal para esa conformación y poder determinar entonces el estudio del artículo 64 o el artículo 65 ya que el mismo opera de manera subsidiaria, es decir, que la pensión de garantía de pensión mínima opera de manera subsidiaria o como consecuencia del no cumplimiento del artículo 64.

Que por lo anterior las excepciones propuestas por Porvenir deberían de prosperar toda vez que dicha entidad no podía realizar ninguna actuación e iniciar el trámite en mención toda vez que allí todavía está ese condicionamiento a la totalidad de cumplimiento por parte de Colpensiones.

Respecto a la orden de seguir adelante la ejecución por las costas del proceso ordinario indica que existe un título judicial qué se consignó al

despacho el día 21 de octubre de 2022 dónde se realiza un cumplimiento del pago de las costas por un valor de \$1.227.000 por lo que solicita tener en consideración dicho pago.

Respecto a la condena en costas en el ejecutivo solicita que las mismas no pueden estar a cargo de Porvenir toda vez que el litigio que trajo el ejecutante representa un imposible jurídico para dicha entidad toda vez que fue una obligación condicionada la que se dio por parte del tribunal, y que por lo tanto, ese condicionamiento implica que Porvenir no haya cumplido en su totalidad con la obligación a su cargo, y que por lo tanto, solicita que una vez se cumpla la misma en su totalidad se le corran los términos a Porvenir para iniciar los respectivos trámites del reconocimiento de la prestación económica.

Por lo anterior solicita se declare no probada las excepciones propuestas por Colpensiones y probadas las propuestas por Porvenir.

Luego ante el recurso interpuesto por el apoderado de la demandada el Juzgado al evidenciar dentro de la misma diligencia la consignación de un título judicial por valor de \$1.227.131 DECLARO probada parcialmente la excepción de pago respecto de las costas impuestas a Porvenir en el proceso ordinario y ordenó seguir adelante la ejecución por la suma de \$681.395 como saldo insoluto por las costas del proceso ordinario.

ALEGATOS DE CONCLUSION

El apoderado de Porvenir S.A solicitó la revocatoria de la providencia de primera instancia y que para ello se debe tener en cuenta que en lo que respecta a Porvenir S.A., el artículo 64 de la Ley 100 de 1993 establece que el requisito para obtener la pensión de vejez en el RAIS es que el afiliado logre acumular en su cuenta de ahorro individual un capital que le permita financiar una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo mensual legal vigente al momento de la expedición de la Ley 100 de 1993 ajustado anualmente según la valoración porcentual del IPC certificado por el DANE. Que el artículo 68 de la Ley 100 de 1993, estableció que las pensiones de vejez en el RAIS se financiarán con el capital que tiene el afiliado en su cuenta de ahorro individual más el bono pensional cuando a ello hubiere lugar. Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, previó que, en caso que un afiliado no logre acumular el capital suficiente para financiar la pensión de vejez en las condiciones que exige el

artículo 64 de la misma ley, podrá obtener el beneficio de la Garantía de la Pensión Mínima, de manera que, los hombres que a la edad de 62 años que no hayan alcanzado a acumular el capital necesario para financiar la pensión mínima y hayan cotizado 1150 semanas, tendrán derecho a que el Gobierno complete el capital necesario para financiar su pensión de vejez.

Que para efectuar los cálculos actuariales definitivos con el fin de verificar si un afiliado logra financiar su pensión de vejez o, la posibilidad de obtener el mencionado beneficio de la GPM, se hace necesario contar con la totalidad de su historia laboral certificada, esto es, conocer claramente el capital de su cuenta de ahorro individual así como las semanas cotizadas en toda su vida y que por lo tanto es imposible para la demandada determinar si le asiste o no derecho al demandante de obtener una pensión de vejez, pues, en la historia laboral actualizada que se allegó al plenario se logra evidenciar que el señor Juan De La Cruz García Rivera, aún cuenta con 19.5 semanas pendientes de verificación, pues la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, dio cumplimiento parcial a lo ordenado por el Honorable Tribunal Superior de Medellín en sentencia del 26 de julio del 2021.

Que por lo anterior se encuentra imposibilitada para resolver la prestación económica solicitada, ya que las condenas emitidas por el Tribunal Superior de Medellín el 26 de julio de 2021 son exigibles de manera condicionada pues, en primera medida, la orden impuesta fue la de que una vez reciba de Colpensiones las cotizaciones y/ aportes del actor, este apruebe su historia laboral y por ende esta se consolide definitivamente, deberá la AFP analizar la procedencia de la pensión de vejez, en los términos establecidos en el artículo 64 de la ley 100 de 1993, efectuando el cálculo actuarial que por lo demás, es requisito indispensable para acreditar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la posibilidad de obtener el beneficio de la GPM, en caso a que haya lugar.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Para resolver, es de resaltar que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con el Artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los Artículos 29 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los Artículos 65 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente, entendiendo que las partes quedaron conformes con lo resuelto de más en la primera instancia.

Se centra el problema jurídico en esta instancia en determinar si hay lugar a declarar prosperas las excepciones propuestas por Porvenir S.A y en consecuencia si debe ordenarse seguir adelante con la ejecución respecto de las obligaciones a cargo de Colpensiones.

Sea lo primero indicar que el artículo 422 del C.G.P establece con respecto al título ejecutivo lo siguiente:

“Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley (...)”. (subraya de la Sala)

Más concretamente en lo que se refiere a la procedencia de la ejecución en materia laboral establece el artículo 100 del C.P.L lo siguiente:

*“ARTICULO 100. PROCEDENCIA DE LA EJECUCION. **Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación** originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o **que emane de una decisión judicial o arbitral firme.***

Cuando de fallos judiciales o laudos arbitrales se desprendan obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que trata este Capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en los artículos 987 y siguientes del Código Judicial, según sea el caso”. (subraya de la Sala).

Partiendo de lo anterior debe tenerse en cuenta que según lo dispuesto en el artículo 278 del C.G.P puede emitir autos y sentencias. Particularmente en lo que se refiere a las sentencias y el contenido de las mismas el artículo 280 ibidem expresa:

“ARTÍCULO 280. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La motivación de la sentencia deberá limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, con indicación de las disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella.

La parte resolutive se proferirá bajo la fórmula “administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley”; deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes

y sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este código.

Cuando la sentencia sea escrita, deberá hacerse una síntesis de la demanda y su contestación”.

Ahora, con respecto a los requisitos del título ejecutivo, se hará un breve apunte respecto del contenido semántico que le es propio a cada uno de estos términos:

*a. **Que la obligación sea clara:** consiste en que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (obligación real o personal), como sus sujetos (acreedor y deudor), además de la descripción de la manera como se ha de llevar a cabo la prestación (plazo o condición), presupuesto sin el cual no sería posible determinar con la certeza requerida el momento de su exigibilidad y la verificación de un eventual incumplimiento.*

*b. **Que la obligación sea expresa:** quiere decir que se encuentre debidamente determinada, especificada y patentada en el documento ejecutivo. Esta determinación, por tanto, solamente es posible hacerse por escrito. En otras palabras, este requisito se cumple cuando los elementos constitutivos de una obligación que se pueda llamar clara se hacen constar por escrito en un instrumento que servirá de prueba inequívoca de la existencia de una obligación.*

*c. **Que la obligación sea exigible:** Significa que únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o, que habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido ésta, sea por mandato legal o por acuerdo entre las partes contractuales. (Juan Guillermo Velásquez “De los procesos ejecutivos”).*

Partiendo de todo lo descrito debe observarse que fue lo que se ordenó en las sentencias del proceso ordinario del cual ahora se pretende la ejecución.

Según sentencia del 13 de mayo de 2020, el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ que el demandante se encuentra válidamente afiliado a PORVENIR S.A.; declaró al Sr. JUAN DE LA CRUZ GARCÍA RIVERA le asiste el derecho a que PORVENIR S.A., dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, inicie los trámites para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, bien sea bajo los parámetros del artículo 64, porque reúna el capital mínimo para financiar la pensión o en aplicación del artículo 65 de Ley 100 de 1993, bajo la modalidad de garantía de pensión mínima, a partir del 1º de febrero de 2019. AUTORIZÓ a PORVENIR S.A. que del retroactivo adeudado realice los descuentos en salud a que haya lugar. CONDENÓ a PORVENIR S.A. a iniciar ante el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, los trámites para el

reconocimiento de la garantía de pensión mínima, de los 30 siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.

CONDENÓ al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, a expedir el acto administrativo correspondiente al reconocimiento de la garantía de pensión mínima del Sr. JUAN DE LA CRUZ GARCÍA RIVERA, para lo cual contara con 30 días siguientes a la solicitud elevada por PORVENIR S.A. y advirtió que, una vez agotados los recursos existentes en la cuenta de ahorro individual del demandante, dicho Ministerio entrará a financiar la prestación.

Le ORDENÓ a PORVENIR S.A., que con un año de anticipación al agotamiento de los recursos inicie los trámites ante el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO para que este continúe con el pago de pensión.

Le ORDENÓ a COLPENSIONES, que, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia, proceda a trasladar todos los recursos recibidos por cotizaciones entre el año 2010-2019 y en conjunto con PORVENIR, proceda a regular la historia laboral del hoy demandante. ABSOLVIÓ de las demás suplicas de la demanda. Impuso costas a cargo de las demandadas PORVENIR S.A. y COLPENSIONES.

Mas adelante ante los recursos de apelación interpuestos esta Sala mediante providencia del 26 de julio de 2021 dispuso lo siguiente:

“PRIMERO: MODIFICAR la orden dada a Colpensiones, para que dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, procediera a trasladar todos los recursos recibidos por cotizaciones entre el año 2010-2019, para en su lugar, ORDENARLE que traslade la totalidad de las cotizaciones realizadas por el actor en toda su vida laboral y que tiene en su poder, con la rentabilidad acumulada durante el respectivo período de las reservas para pensión de vejez del ISS, o en su defecto la informada por la Superintendencia Financiera para los períodos respectivos, en los términos de los arts. 6 y 7 del Decreto 3595 de 2008.

SEGUNDO: REVOCAR la orden de reconocer la pensión de vejez del art. 64 de la Ley 100 de 1993 desde el 1º de febrero de 2019, por las razones manifestadas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia emitida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: Costas en esta instancia en la suma de \$227.131 a cargo de cada una de las accionadas Colpensiones y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y en la suma de \$908.526 a cargo

de PORVENIR S.A., por no haber salido avante los recursos de apelación interpuestos”.

En virtud de lo anterior fue que el juzgado de conocimiento en auto que libró mandamiento de pago ordenó a Colpensiones trasladar a la AFP PORVENIR S.A. la totalidad de las cotizaciones realizadas por el actor en toda su vida laboral y que tiene en su poder, con la rentabilidad acumulada durante el respectivo período de las reservas para pensión de vejez del ISS, o en su defecto la informada por la Superintendencia Financiera para los períodos respectivos, en los términos de los arts. 6 y 7 del Decreto 3595 DE 2008, y a Porvenir S.A ordenó que una vez COLPENSIONES ponga a disposición los dineros correspondientes a las cotizaciones y en la forma como se indicó en la sentencia, el fondo de pensiones tendrá el término de 10 días, para que realice el estudio de reconocimiento de la prestación económica de vejez o de garantía de la pensión mínima del Sr. JUAN DE LA CRUZ GARCÍA RIVERA bajo los postulados de los artículos 64 o 65 de la Ley 100/1993.

Partiendo de lo anterior para el caso bajo estudio se tiene que Colpensiones si ha cumplido con la obligación a su cargo según se desprende de la documental obrante a folios 95 y ss del expediente digital donde se le informa al actor lo siguiente:

“Al respecto, con relación a los aportes de los tiempos cotizados al Instituto de Seguros Sociales hoy Liquidado y a COLPENSIONES, se informa lo siguiente:

Una vez consultadas las bases de datos y nuestros Sistemas de información, en lo referente a su solicitud, la Dirección de Contribuciones Pensionales y Egresos de la Gerencia de Financiamiento e Inversiones de COLPENSIONES, informa que, realizó traslado de aportes a la Administradora de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A., en nombre del señor JUAN DE LA CRUZ GARCIA RIVERA identificado con cédula de ciudadanía número 2.776.141, por concepto de “Inactividad Laboral – Decreto 3798 y Reevaluados por Traslado de Régimen” para los periodos comprendidos entre 1994/06 hasta 2010/05, aportes que no correspondían al régimen de Prima Media administrado por COLPENSIONES, de acuerdo con el siguiente detalle que registra el Sistema de Información de los Afiliados a las Administradoras de los Fondos de Pensión - SIAFP:

(...)

Así mismo, se procedió a realizar la liquidación de la devolución de aportes, por concepto de “No Vinculados”, a favor de la Administradora de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A., correspondiente a los periodos entre 2001/02 hasta 2019/01 en nombre del señor JUAN DE LA CRUZ GARCIA RIVERA. Para esto, se expidió la ordenación de devolución de aportes mediante resoluciones No. 2022H03753 y No. 2022H03765 del 13 de septiembre de 2022.

Los archivos planos con la información de los pagos se reportan a la Administradora de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A., a través del Sistema de Información de los Afiliados a las Administradoras de

los Fondos de Pensión - SIAFP, al cual tienen acceso las administradoras de pensiones para tal efecto.

Es importante mencionar, que el cálculo de la devolución de aportes se actualiza con la tasa RISS (Tasas de Rentabilidad de las Reservas del Instituto de Seguros Sociales - RISS), informada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Por otra parte, se informa que al consultar el Sistema Liquidador de Bonos Pensionales de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - OBP, único sistema válido para la liquidación de Bonos Pensionales, se evidencia que, a la fecha, se tramita una solicitud por parte de la Administradora de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A., a la que está actualmente afiliado el señor GARCIA RIVERA, de Bono Pensional Tipo A modalidad 2, del día 08/03/2022, en el cual se encuentran incluidos los periodos entre 1977/05 hasta 1994/02.

En el Bono Pensional Tipo A modalidad 2 participa: La NACIÓN en calidad de Emisor, por los tiempos cotizados al ISS liquidado con anterioridad al 01/04/1994 y el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en calidad de contribuyente por los tiempos laborados con la entidad...)

De lo anterior se evidencia claramente que Colpensiones ya trasladó a Porvenir S.A por concepto de **“Inactividad Laboral – Decreto 3798 y Reevaluados por Traslado de Régimen”** los periodos comprendidos entre **1994/06 hasta 2010/05**, aportes que no correspondían al régimen de Prima Media administrado por COLPENSIONES, y que igualmente realizó la devolución de aportes, por concepto de **“No Vinculados”**, a favor de PORVENIR S.A., correspondiente a los periodos entre **2001/02 hasta 2019/01** en nombre del señor JUAN DE LA CRUZ GARCIA RIVERA.

Lo anterior concuerda con la historia laboral aportada por la misma entidad Porvenir S.A donde se evidencia una historia laboral consolidada con un total de 1.578 semanas cotizadas donde se encuentran incluidos los tiempos ordenados en la sentencia del proceso ordinario objeto de ejecución y de los cuales se ordenó el traslado desde el 2010 al 2019 como se había dispuesto en las sentencias del proceso ordinario por lo que Considera la Sala que en este evento si debe prosperar la excepción de pago cumplimiento de obligación de hacer, respecto de las obligaciones impuestas a cargo de Colpensiones.

Ahora, indica Porvenir S.A como sustento a su defensa que no ha podido cumplir con las obligaciones a su cargo al ser una obligación condicionada a que Colpensiones realice el traslado de la totalidad de los aportes y semanas del afiliado y que aun se encuentran por verificar 19.5 semanas que aún no han sido acreditadas en la cuenta del actor, y que se encuentran a cargo de Colpensiones.

A pesar de lo anterior indica la Sala que dicho argumento no tiene vocación de prosperidad por tres razones fundamentales, la primera es que con las semanas que se encuentra acreditadas en la historia laboral allegada por Porvenir S.A es suficiente para reconocer la pensión en la modalidad de garantía de pensión mínima tal y como se ordenó en la sentencia del proceso ordinario, la segunda por cuanto en momento alguno se discriminó cuales y a que periodos correspondían las supuestas semanas faltantes, y en tercer lugar por cuanto Porvenir S.A en el hipotético caso tampoco demostró que las supuestas 19.5 semanas faltantes fueran necesarias para el reconocimiento de la pensión de vejez al actor en los términos del artículo 64 de la ley 100 de 1993, las que por demás se evidencian como innecesarias dado que el capital que se refleja en la historia laboral del ejecutante es mínimo como para financiar una pensión de vejez en los términos del artículo 64 ibidem, por lo que aparentemente se observa que la forma de reconocer la prestación aludida sería bajo la modalidad de garantía de pensión mínima, si embargo, en uno u otro evento como ya se indicó, Porvenir no demostró que el capital al que corresponden las semanas en comento fueran evidentemente necesarias para el estudio y reconocimiento de la prestación a su cargo como se ordenó en las sentencias del proceso ordinario.

Tampoco prosperará el argumento de Porvenir S.A relacionado con el hecho de no ser condenado en costas dentro del proceso ejecutivo pues como se vio dentro del proceso e historia laboral que reposa en manos de Porvenir S.A ya se encuentran los elementos necesarios y suficientes para que dicha entidad cumpliera con su obligación a su cargo como lo es el reconocimiento de la pensión de vejez a favor del ejecutante sin que lo haya hecho razón por la cual considera la Sala que si debe ser condenado en costas, tanto en primera instancia, como en segunda instancia por no prosperar el recurso de apelación interpuesto, en esta instancia se fijan como costas a cargo de Porvenir S.A y en favor del ejecutante en la suma de \$2.320.000.

Por lo anterior lo legal y pertinente será CONFIRMAR la providencia de primera instancia emitida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín mediante la cual se resolvieron las excepciones dentro del presente proceso ejecutivo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia de primera instancia emitida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín mediante la cual se resolvieron las excepciones dentro del presente proceso ejecutivo, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la parte ejecutada Porvenir S.A y en favor del ejecutante en la suma de \$2.320.000.

Déjese copia de lo resuelto en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de procedencia.

TERCERO: Lo resuelto se notifica por ESTADOS. Se declara cerrada la audiencia y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

Los Magistrados,



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTINEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
- SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 029 del 21 de febrero de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>